



## “El funcionario se llevaba el coche repleto de legajos del Archivo Militar”

Fuentes de Defensa admiten el ‘negocio’ pero culpan «a los que pagaban»

FELIPE VILLEGAS ■ SEVILLA

“El funcionario al que usted alude, que falleció en septiembre de 2007, pudo llevarse más de 12.000 euros ofreciendo de tapadillo copias digitalizadas de expedientes a los usuarios, que fueron los que alimentaron a esa bestia”. Así justifican el mercadeo que, a cuenta del interés por la Memoria Histórica, había orquestado uno de los suyos.

Lo admiten a regañadientes, pero han acabado dando más detalles incluso que los propios historiadores y familiares de víctimas estafados por el funcionario militar que, hasta septiembre de 2007, controlaba las consultas, las búsquedas y las entregas de documentación en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, el mayor sobre la represión de Andalucía.

“Ese señor se aprovechó de que el manejo de los fondos sigue siendo algo caótico, y de que la ordenación es incluso peor. Francamente, vivimos en la locura y no tenemos medios suficientes; esperamos, no obstante, que cuando el archivo se traslade a uno de los pabellones de enfrente que estamos rehabilitando, la situación pueda cambiar”, informan fuentes de Defensa, las mismas que, de todos modos, pretenden restar importancia a lo sucedido: “En ese archivo se ha metido mucho la mano en todas las décadas. No es algo nuevo. Lo que ocurre es que queremos ponernos serios en un momento en que la voracidad del querer saber es mucho mayor”.

De esa voracidad se nutrió el referido funcionario, quien de tapadillo fraguó un sistema redondo para sacarse un sobresueldo: localizaba los grupos de expedientes que les pedían los usuarios y, en vez de servirlos tal cual, les ofrecía la posibilidad de obtener una copia digitalizada. Todo ello a 10 céntimos la página. La oferta era tan tentadora que la lista de pedidos creció y creció, y como pasó que el promotor falleció de forma repentina en septiembre de 2007, dejó a muchos colgados con los ingresos hechos pero sin la información recibida. Y así hasta hoy.

“El problema es que esa gente alimentó a la bestia, cuando



ASÍ ES POR DENTRO. Aspecto que presenta el mayor archivo de la Guerra de Andalucía, en Eduardo Dato.

### LA REACCIÓN

## El PP exige explicaciones a la ministra Chacón

■ Si hace un par de semanas se formularon ante el Congreso de los Diputados varias preguntas desde Esquerra Republicana-IU sobre la situación del Archivo Histórico del Tribunal Militar que la ministra Carme Chacón deberá responder, el pasado miércoles hacía lo propio el diputado popular por Sevilla Adolfo González. Su pregunta es rotunda: “¿Tiene intención el Gobierno de adoptar las medidas oportunas para la preservación integral del archivo, así como para facilitar la investigación a todos los que requieren de su consulta como reconoce el artículo 22 de la Ley de Memoria Histórica?”.

también ellos han sido culpables por consentir ese chanchullo”. Sólo que había gente que llegó a creer que lo de las copias era un servicio más del archivo, lógico porque en los que suelen estar en condiciones sí es así.

La otra pregunta clave es si no había ningún mando militar que se oliese lo que pasaba. En efecto, el archivo funciona con la figura del secretario relator, y en el tiempo durante el que funcionó el negocio del funcionario, este cargo lo ostentaba un comandante, que además pasaba bastante tiempo en el lugar porque se afanó en darle cierto orden. Según la versión oficial, “ese responsable sólo se percató de lo que estaba pasando en el verano de 2007”, es decir, apenas dos meses antes de que el funcionario muriese.

“De hecho, ese comandante fue el que denunció al funcionario al comprobar que faltaban legajos”. El asunto ya era clamoroso. “A raíz de aquello, se abrió una investigación y se tenía previsto trasladar de lugar al funcionario, e incluso po-

dría haberse ido más allá, pero como murió, se zanjó el asunto”.

**EN EL MALETERO.** Eso sí, trascendieron los detalles de su *chiringuito*: “Metía el coche aquí y cargaba el maletero con los legajos que les pedían; se los llevaba a casa, donde su hijo los digitalizaba. Cuando se destapó el asunto, este hijo suyo nos vino con más de 200 procedimientos, y quién sabe si no habrán vendido más de uno...”, relatan estas

En Defensa arguyen que fue el mando al cargo del archivo quien denunció el extravío de los legajos

fuentes, que estiman que, a la luz del negocio, “pudieron sacarse más de 12.000 euros”. “De hecho, prácticamente todos los expedientes de las sierras de Córdoba y Jaén, los más demandados, pasaron por sus manos”.

“Lástima que no hubiese, al menos, ofrecido copias de cada documento que digitalizaba al archivo”, comentan los historiadores que lo frecuentan y que conocen su “estado tan lamentable, impropio de una democracia con una Ley de Memoria Histórica y muchas respuestas en esos fondos”.

## Chapuzas chusqueras

Antonio Zoido



En el siglo XVIII, el Ejército español tuvo una corriente ilustrada con nombres tan importante como Cadalso, Antonio de Ulloa, Malaspina, Domingo Badía... La mayoría de ellos terminó mal. Tras el fin del Trienio Constitucional, otra hornada de militares, Felipe Bauzá y Mateo Seoane, entre ellos, acabó exiliada en Londres, donde colaboraron con las instituciones científicas británicas y dejaron editadas numerosas obras y revistas.

Poco después, el comienzo de las Guerras de África ponía fin al fenómeno y, hasta la consecución de la democracia, sólo aparecerían raras figuras como las de Ortiz de Echagüe o Luis Berenguer. Era mucho pedir, por tanto, que en nuestras fuerzas armadas (“poder independiente” de hecho durante la dictadura de Franco) se desarrollasen iniciativas proclives a la investigación y, menos aún, a la de la justicia militar a partir de 1936, de la que sólo se han escrito algunas pocas obras como *Justicia en Guerra*, del comandante Joaquín Gil Honduvilla. El reportaje de ayer en este periódico sobre el *affaire* de las copias digitales da una idea clara y distinta -esto es, cartesiana- del estado en el que se encuentra el archivo.

Lo que ha sucedido sigue la lógica del quiste cultural; es un mundo de *Juan Lobón* pero, en vez de con furtivos, con funcionarios militares que se llevan a casa los chuscos del rancho. Poco tiene que ver lo pagado por la copia de documentos con los casos de corrupción de estos días aunque esta dependencia demande, antes que nada, luz y taquígrafos y, después, un personal que atienda de forma normalizada al público. A lo mejor los únicos que, hoy por hoy, podrían hacerlo serían esos chavales que hasta ahora hicieron las copias. Hace ya muchos años, en Doñana se acabó con los furtivos convirtiéndolos en guías. Desde entonces aquello va como la seda.

Antonio Zoido es escritor e historiador